



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 23598/2025/CA1; ELEPRINT SA-MARTINEZ DE LA
FUENTE SA UTE-INTERCONEXION 132 KV (TF 67869394-I) c/
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE
ORGANISMO EXTERNO

Buenos Aires, de diciembre de 2025.- PDP

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que por sentencia del 20/3/25 el Tribunal Fiscal de la Nación –en adelante “TFN”–, por mayoría, resolvió lo siguiente: 1º) Confirmar la pretensión fiscal, en lo que hace al capital reclamado, con costas y 2º) Condonar la multa aplicada y los intereses resarcitorios reclamados, con costas por su orden.

Señaló que la Dirección Regional Centro de la entonces AFIP-DGI determinó de oficio el IVA, períodos fiscales enero a julio de 2017, originando un saldo a favor del organismo en el período enero, motivo por el cual calculó los intereses resarcitorios e impuso una multa en los términos del artículo 45 de la ley 11.683, graduada en un 50%, al tiempo que determinó los nuevos saldos técnicos a favor de Eleprint SA-Martinez de la Fuente SA-UTE Interconexion 132 kv –en adelante, “la UTE”–, por el período julio de 2017.

Expuso que, de acuerdo con los relatos de las partes –en los aspectos que no generaron controversia–, la UTE se constituyó con el objeto de presentarse a la licitación correspondiente a la construcción de la Interconexión de 132 KV Henderson-Pehuajó-General Villegas-Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-Secretaría de Energía, de la cual resultó adjudicataria.

Prosiguió explicando que el comitente otorgó a la UTE un anticipo financiero, en enero de 2017, contra la entrega de una factura y la constitución de una garantía –entre otros extremos–, desembolsando la suma de dinero en julio de 2017.

Señaló que las partes no concuerdan con relación al tratamiento de este negocio frente al IVA: mientras que para la apelante se trató de un anticipo financiero que congeló el precio, resultando de aplicación el artículo 5º último párrafo de la ley de IVA (ley 20.631, t.v.), para el



organismo fiscal, en cambio, de una percepción parcial del precio, vinculada con la realización de una obra sobre inmueble ajeno, encuadrable en el inciso c) del mentado precepto legal.

Avanzando en esta dicotomía, mencionó que, al presentar las declaraciones juradas del gravamen, la UTE consignó el débito fiscal vinculado con el anticipo en julio de 2017 –mes de la percepción–, argumentando el fisco nacional que debió hacerlo en el componente enero de ese año.

La mayoría del TFN sostuvo que la cuestión a resolver estribaba en resolver si la suma facturada por la UTE consistía en un anticipo financiero que había congelado el precio, o bien un pago a cuenta del precio total de la obra.

Luego de adentrarse en una detenida lectura de la ley 13.064 y de los términos de la contratación pública –compulsando el contrato celebrado el 3/7/13, entre el “Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal”; la “Unidad Ejecutora del Programa”, y la UTE, junto con el “Programa de abastecimiento eléctrico en las distintas regiones del país-ampliación del sistema de transporte por distribución troncal en la Provincia de Buenos Aires-‘Condiciones Generales del Contrato’”, instrumentos que se tienen a la vista (cfr. información digital remitida vía DEO–, aseveró que el anticipo en trato no había congelado el precio total de la obra pública, sino solamente el precio del anticipo mismo. Es decir, el precio de la contratación ya estaba determinado en el contrato, resultando por ello inaplicable el último párrafo del artículo 5° de la ley del impuesto.

Ahondando en esta línea de entendimiento, el vocal Martín –quien, junto con la vocal O’ Donnell, conformó la mayoría–, destacó que la cláusula 19 del contrato del 3/7/13 estipuló el precio de total originario de la oferta, y la cláusula 51 dispuso que “*El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la prestación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 23598/2025/CA1; ELEPRINT SA-MARTINEZ DE LA
FUENTE SA UTE-INTERCONEXION 132 KV (TF 67869394-I) c/
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE
ORGANISMO EXTERNO

aceptables para el Contratante, en los mismos montos y monedas del anticipo...”.

“El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras”.

“El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado...”.

Reseñó la tesitura de la actora –esto es, que se trataría de un anticipo que había congelado el precio y, por lo tanto, que no se había producido el hecho imponible al momento de su otorgamiento–, negando que resultare admisible. Ello, por cuanto, los anticipos tenían por destino el acopio de materiales de construcción, equipos y otros insumos necesarios para el inicio de las obras, formando parte del concepto “percepción”.

Por otro lado, ponderó que en las facturas emitidas por la UTE se había discriminado el IVA, constituyendo documentos generadores del débito fiscal que, al mismo tiempo, dieron lugar a un crédito fiscal para el comprador-prestatario, utilizable en el mismo en el período fiscal –enero de 2017–; de ahí que, permitir la imputación “tardía” de ese débito fiscal, atentaría contra la dinámica propia del tributo.

En definitiva, la mayoría recogió la postura sostenida por el organismo fiscal y resolvió que el débito fiscal había tenido espacio en enero de 2017, y no en julio del mismo año.

En otro orden de consideraciones, ese mismo voto consideró que la obligación tributaria en trato había sido ingresada por la UTE, luego



de incorporar el débito fiscal en la declaración jurada de julio de 2017, con lo cual, a la sazón de lo dispuesto en la ley 27.743 y normas concordantes, correspondía disponer la condonación de los intereses resarcitorios y la multa aplicada, puesto que se encontraban reunidos los recaudos a los cuales la norma sujetó el beneficio fiscal.

II. Que el 8/4/25 la parte actora apeló la sentencia –remedio concedido el 10/4/25–, acompañando la expresión de agravios el 22/4/25, que fuera contestada por la contraria el 11/6/25.

De su lado, si bien el 8/5/25 el fisco nacional apeló la sentencia –recurso concedido el 12/5/25–, el 26/5/25 informó que desistía de la apelación, acompañando al efecto la Nota IF-2025-02011255-AFIP-DECONA#SDGTLI, del 23/5/25, suscripta por el Jefe de Departamento Contencioso Administrativo de ARCA. El TFN tuvo por desistida a la parte el 27/5/25.

III. Que, en su memorial, la parte actora, luego de efectuar un relato de los antecedentes fácticos y jurídicos de la causa, señala que el criterio impreso por el TFN se opone a la opinión brindada por la ex AFIP en la sección “Consultas frecuentes” –ID 12668523–, que transcribe. Asimismo menciona al “Grupo de enlace de la AFIP”, documento del 24/9/03.

Señala que se está enfrente a un contrato de obra pública, con lo cual es equivocado considerar el espejo entre créditos y débitos, ya que el Estado no es un contribuyente del IVA.

Cuestiona los fundamentos empleados por el vocal Martín, centrados –dice– en la idea de que entre los contratantes se pergeñó un sistema jurídico contable para engañar al fisco.

Manifiesta que en la sentencia apelada no se aplicó el instituto de las “correcciones simétricas”, invocado en su recurso de apelación.

En otro orden, tilda de nula la sentencia en crisis, ya que no existió una mayoría que determinara un ganador (sic).

Finalmente, solicita que las costas se impongan al fisco nacional.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 23598/2025/CA1; ELEPRINT SA-MARTINEZ DE LA
FUENTE SA UTE-INTERCONEXION 132 KV (TF 67869394-I) c/
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE
ORGANISMO EXTERNO

Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada en lo que es materia de agravios, con costas.

IV. Que previo a ingresar al tratamiento de los agravios descriptos, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a la recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- M° Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Golden Penaut Argentina c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 72680/2018, del 2/7/19; esta Sala —en su actual integración—, causa CAF 49.932/2015/CA2, “D’Alessandro, Jorge Héctor (TF 33405-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 2/5/24).

V. Asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el



juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. CSJN, Fallos: 300:985).

Así pues, "...lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)" (cfr. esta Cámara, Sala III, "*La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGP*", Causa N° 27409/12 del 31/10/12; "*Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGP*", Causa N° 4502/14 del 29/9/14; "*Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGP*", Causa N° 18124/16 del 14/9/17; "*Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGP*", Causa N° 83620/16, del 16/10/18; "*Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGP*", Causa N° 72673/18, del 7/5/19, entre otros; esta Sala –en su actual integración–, Causa CAF 47840/2023/CA1, "*Sol Frut SA (TF 79199011-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo*", del 9/5/24).

VI. Que, sentado lo anterior, en atención al estado actual de estas actuaciones, se colige que la materia que corresponde aquí atender es la relativa al momento en el cual se perfeccionó el hecho imponible en el IVA, al otorgar la comitente un anticipo financiero a la UTE actora.

De suyo, queda fuera de esta investigación la condonación de los intereses y la multa aplicada; la imposición de las costas en dicho asunto y la regulación de honorarios practicada en el punto resolutive 3° de la sentencia apelada. Todo ello, en razón de que no fueron materia de agravios.

VII. Que las posiciones asumidas por las partes contendientes emergen de una serie de acontecimientos fácticos no discutidos en la *litis*; la controversia, en cambio, se produjo a partir de su encuadramiento jurídico-tributario.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III

CAF 23598/2025/CA1; ELEPRINT SA-MARTINEZ DE LA FUENTE SA UTE-INTERCONEXION 132 KV (TF 67869394-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

En cuanto a lo primero, no hay disenso en torno a que la UTE suscribió un contrato de obra pública, que tuvo por objeto la prestación descripta más arriba, y que, en cumplimiento de los términos de dicho documento –suscripto el 3/7/13–, en enero de 2017 se le otorgó un anticipo financiero, emitiendo las facturas tipo 13, números 003-00000261; 0003-00000262 (con nota de débito tipo B 0003-00000006); 0003-00000263 y 0003-00000264 (con nota de débito tipo B 0003-00000007), al Fondo Fiduciario para el transporte Eléctrico Federal, en concepto de “Anticipo sobre obras a efectuar por Ampliación de la Estación Transformadora Pehuajó, según vuestra OSBA 1-1115 y Villegas según vuestra OSBA 1-1114. Parte en Pesos-Obra Construcción de la parte I de la Interconexión 132 KV Henderson-Pehuajó-General Villegas, Provincia de Buenos Aires, República Argentina”. Las notas débito respondían a los conceptos “Ajuste por diferencia de cotización del dólar estadounidenses”.

Luego, al percibir el pago del anticipo, en julio de 2017, consignó el debido fiscal del IVA, en la declaración jurada de ese componente.

Ahora bien, como se adelantó, el diferendo se centró en el tratamiento fiscal del negocio jurídico, en particular, el momento del nacimiento del débito fiscal y la consecuente obligación tributaria. Así pues, mientras que para la actora ello tuvo lugar en julio de 2017, para el fisco nacional, en enero del mismo año.

En apoyo de su posición, la demandada invoca el inciso c) del artículo 5° de la ley 20.631 –el cual dispone que: “*El hecho imponible se perfecciona:... En el caso de trabajos sobre inmuebles de terceros, en el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total, o en el de la percepción total o parcial del precio o en el de la facturación, el que fuera anterior*”–, al tiempo que la actora lo hace en su último párrafo, que establece que: “*Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes,*



cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, el hecho imponible se perfeccionará, respecto del importe recibido, en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos”.

VIII. Que estos juzgadores tienen para sí que la resolución a la cual arribó el tribunal de grado, se ajusta a derecho.

Para así entender, en primer lugar, se colige que es acertada la calificación jurídica del anticipo financiero recibido por la UTE, como un instituto diverso al cual el legislador previó en el último párrafo del artículo 5° de la ley 20.631, desde que, en los hechos, no ha congelado el precio de la obra contratada, pues éste ya estaba consignado en el contrato.

En esta tónica luce acertado lo apuntado por el TFN –con cita de Marchevsky–, al indicar que: “...una seña congele un precio significará que lo fija, lo que lo hace cierto e inmodificable”; agregándose aquí que el anticipo debe congelar el precio total de la obra, no una parte (v. Fenochietto, Ricardo, “*El impuesto al valor agregado*”, La Ley, 2° ed., Buenos Aires, 2007, p. 326).

En tal sendero, pretender aplicar el último párrafo del transcripto artículo 5°, sería desconocer la regla hermenéutica según la cual, cuando una norma es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación (cfr. CSJN, Fallos: 218:56, 320:2145, Considerando 6°, entre otros); de modo tal que, no cabe atribuir a la norma un alcance que difiera de la literalidad del texto (CSJN, Fallos: 310:865).

Por otro lado, en cuanto a la aplicación de las “correcciones simétricas” invocada por la actora, fue acertado lo afirmado por el fisco nacional al contestar el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal –sección: “Contestación del agravio N° 2”–, en el sentido de que ello no predicable en este caso. Es que, como se sabe, el instituto contempla una situación diversa a la de autos, pues su premisa consiste en la presencia de una verificación fiscal, en cuya virtud se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a favor del fisco.

Por último, en orden a que el voto de la mayoría del TFN conllevaría a la declaración de nulidad de la sentencia, no resulta un





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 23598/2025/CA1; ELEPRINT SA-MARTINEZ DE LA
FUENTE SA UTE-INTERCONEXION 132 KV (TF 67869394-I) c/
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE
ORGANISMO EXTERNO

agravio atendible, toda vez que, si bien el vocal Martín expuso otros argumentos no plasmados por la vocal O' Donnell, en lo sustancial –esto es, en la aplicación del inciso c) del artículo 5° de la ley del impuesto–, ambos votos fueron coincidentes (v. esta Sala, *in re*: “Cooperativa Agrícola Ganadera de Peyrano (TF 31857-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 11987/2024/CA1, del 16/9/25).

IX. Que, en mérito de todo lo expuesto, se concluye que la sentencia apelada, en lo que ha sido materia de agravios, debe ser confirmada, en tanto el examen fáctico y jurídico realizado se presenta como una razonada derivación del derecho vigente.

En cuanto a la imposición de las costas, también se convalida el criterio del tribunal *a quo*, atento no advertirse motivos que justifiquen un tratamiento diverso.

Por todo lo expuesto, **SE RESUELVE**: Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (cfr. Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, art. 68 primer párrafo).

Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y considerando, además, el resultado del recurso, SE FIJAN los emolumentos correspondientes a la dirección letrada y representación del fisco nacional, por las tareas cumplidas en la alzada –contestación del recurso del 11/6/25–, en 10 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de pesos ochocientos seis mil seiscientos cuarenta –\$ 806.640– (ley 27.423, art. 30 y conchs. y Res. SGA 2996/2025).

Hágase saber que, en caso de que los profesionales beneficiarios acrediten –en la instancia anterior– su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a



dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).

Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.

Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

JORGE EDUARDO MORÁN

